

RUMANÍA

COMENTARIO GENERAL

Situación política

La situación política durante el mes de noviembre en Rumanía ha estado presidida por la incertidumbre sobre el hecho de si es posible consolidar una oposición política a la coalición de gobierno que preside el PDL y que está dirigida desde la Jefatura del Estado (más que desde la de gobierno) por el propio líder del partido y presidente de Rumanía, Traian Basescu.

Tras los sucesivos fracasos en frenar las medidas legislativas del gobierno de coalición, inspiradas en los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, y que han consistido en votaciones fallidas, una moción de censura e incluso algún plante de los parlamentarios, además de sucesivos envíos al Tribunal Constitucional, el epicentro de la especulación política se fundamenta en vaticinar sobre la posibilidad de un viraje del PNL hacia una alianza con PDL, partido que en el fondo está mucho más de acuerdo con su naturaleza ideológica, que la incierta alianza táctica con el PSD.

De que llegue a despejarse esta incógnita, según opinan todos los medios, depende la consolidación de una mayoría estable de centro –derecha, capaz de llevar adelante las reformas estructurales reclamadas por el FMI y las instituciones financieras internacionales sin más tropiezos. También, depende de ello la posibilidad para el PDL de poder prescindir de la que ya empieza a ser molesta dependencia del partido de la minoría húngara, ligada siempre a concesiones relacionadas con las exigencias nacionalistas de aquella. Esta alianza, pese a los éxitos logrados a favor de las tradicionales e históricas reivindicaciones de la minoría, han comenzado ya a desgastar a la propia UMDR y a pasarle factura por su apoyo a los recortes sociales del gobierno, contribuyendo a minar su base electoral al agudizar las contradicciones con otras fuerzas políticas disidentes, como la encabezada por el carismático obispo Tokes, actualmente europarlamentario y líder histórico de la revuelta que acabó con el régimen comunista en 1989.

Pero este esperado giro estratégico del PNL parece no acabar de ser visto con claridad por sus dirigentes y en especial por su máximo líder, Crin Antonescu. Quizá porque por encima de la proverbial enemistad de éste con Traian Basescu, la formación liberal no encuentra aún suficientes garantías como para tomarse en serio la posibilidad de convertirse en un auténtico partido bisagra que le convertiría, a pesar de su poco peso específico, en el verdadero árbitro de la situación. En consecuencia, la alianza táctica con el PSD, se mantiene, aunque rozando siempre la mayoría necesaria que no llega a desautorizar al gobierno, a hacerle caer o a modificar su política.

Esta situación es, según muchos comentaristas políticos, la peor que puede darse, pues ni ofrece una salida constructiva a la situación actual, que podría propiciar como en octubre del 2009 la salida del

gobierno, ni permite a la oposición otra opción que la de un hostigamiento permanentemente a la coalición, que no ofrece nada positivo, y que no trae otro resultado que un agravamiento estéril y exasperante de la lucha política. Así, el enfrentamiento sigue “in crescendo” en la cámara de diputados, en la que la oposición se ha empeñado en un boicot sistemático de la labor legislativa hasta conseguir la dimisión de la presidenta, Roberta Anastase, acusada por PSD y PNL de cometer fraude en el recuento de votos. Esta situación se percibe cada vez con mayor perplejidad por la opinión pública, que contempla el espectáculo desde lejos y no acierta a comprender cómo los parlamentarios se entretienen en sus disputas y no emplean sus fuerzas en aplicarse a resolver los graves problemas que afectan al país.

En consecuencia, durante el mes de noviembre se han multiplicado las especulaciones sobre los diferentes derroteros que podrían seguir las relaciones políticas entre los diferentes partidos, tanto los que forman la coalición de gobierno, como los de la oposición. Deseosos de buscar elementos que consoliden el bloque de la oposición y alejen al PNL de los cantos de sirena del partido que lidera la coalición de gobierno, han ofrecido un pacto para la candidatura a la presidencia de Rumanía en torno a la figura del líder del PNL, Crin Antonescu.

Con la disculpa de que las elecciones están aún lejos (no se celebrarán hasta el 2014) Antonescu ha declinado la invitación con palabras amables y de agradecimiento. Tras esa aparente concordia, los analistas han creído ver que, a pesar de su posición violentamente crítica hacia el PDL, el PNL no ha descartado llegar a algún tipo de alianza o de acuerdo con este último partido. «Doy las gracias al presidente del PSD, por su disponibilidad para apoyar a un candidato PNL para ser el próximo presidente de Rumania en 2014. Sin embargo, no estamos en el 2014, no es la presidencia de Rumanía el tema más candente en la agenda y - las dos partes - no están en condiciones de discutir un pacto político, al menos no por ahora », dijo Antonescu al conocer la propuesta formulada por el líder socialdemócrata.

Por otro lado, una parte de los miembros del campo liberal han mostrado su interés en un acercamiento al Partido Demócrata Liberal, aunque dirigido a la facción liderada por el ex ministro del Interior Vasile Blaga, y supeditado a que éste gane la batalla por la supremacía del partido. En este sentido, el vicepresidente del PNL, Dan Radu Rusanu, ha hecho declaraciones en el sentido de que los liberales estarían dispuestos a reconstruir su alianza con el PDL, previa renuncia del Primer Ministro Emil Boc y si el PDL consiente en una disminución de la tutela que Traian Baesecu ejerce sobre el partido. «Estamos a la espera del congreso PDL», dijo Rusanu. «Después de que, se reformule un nuevo liderazgo de PDL, el PNL tomará una decisión sobre si se debe iniciar negociaciones con el PDL. Personalmente, no creo que el Sr. Emil Boc será reelegido como presidente del PDL », dijo Rusanu.

Sin embargo, Crin Antonescu rechazó un acercamiento a PDL, diciendo que las conversaciones con los demócratas liberales no dependen de quién es el líder, sino de la política que desarrolla el partido.

«Independientemente de que encabezada por el Sr. Boc o cualquier otra persona, en estos momentos y desde hace algunos años, PDL es y ha sido, un partido nocivo y perjudicial para Rumania, que ha traído al país una crisis sin precedentes, que demuestra un inclinación a convertirse en un Estado-partido, y, en consecuencia, las relaciones entre nosotros o negociaciones están fuera de cuestión, y mucho menos puede esperarse cualquier clase de cooperación », dijo Antonescu.

El rechazo al modelo político impuesto por Basescu, e incluso a la propia figura del Presidente, es por el momento, el catalizador que permite propiciar un punto de convergencia en la oposición entre dos fuerzas políticas tan dispares como PSD y PNL. Tras las declaraciones de Antonescu, el líder socialdemócrata, Victor Ponta, describió a Traian Basescu y al PDL como los mayores enemigos de la Socialdemocracia y de Rumanía, por lo que cualquier otra batalla que no sea contra ellos debe aplazarse. Cualquier posibilidad de cooperación con el Jefe del Estado o con su partido queda, por tanto, descartada.

En este contexto, la oposición acordó llegar a posiciones comunes más coherentes, dejar de pelearse entre sí y “quitar hierro” a las recientes fricciones y acusaciones mutuas entre los líderes de las dos formaciones. Para preparar el terreno, los liberales iniciaron a mediados de mes una serie de consultas a las que invitaron a todos los partidos del espectro político. La negativa del PDL a asistir estaba más que prevista. No así la del otro partido de la coalición de gobierno, UMDR, quien al principio manifestó su deseo de asistir, pero que declinó más tarde tras una oportuna llamada al orden de su socio de gobierno.

El otro elemento importante del debate político viene dado por las esperanzas de entrada de Rumanía en el espacio de Schengen. Las previsiones en principio se han cifrado en que la entrada se debería producir en marzo del 2011, y el Ministerio del Interior se ha venido aplicando en ultimar los detalles técnicos para que esta incorporación pueda producirse efectivamente en esa fecha.

Sin embargo, lo que para Rumanía es un problema técnico, no parece representar lo mismo para otros socios del espacio Schengen, particularmente para Francia. El pasado mes de noviembre, el recién estrenado Ministro del Interior francés, que ha acumulado las funciones del desaparecido Ministerio de Inmigración, declaró su escepticismo sobre la adhesión de Rumanía a Schengen.

El Secretario de Estado para Europa, Pierre Lellouch fue, como acostumbra, aún más contundente: declaró que la adhesión en ningún caso iba a poder producirse antes del verano, una vez que se conociera el informe del Mecanismo de Verificación que cada año publica la Comisión. Como se recordará, el último informe señalaba el retroceso de Rumanía en la convergencia de Rumanía en materia de Justicia e Interior durante el último año, expresando sus dudas sobre la voluntad del gobierno en seguir en esa dirección. La importancia de esas declaraciones estriban en vincular algo que Rumanía nunca ha querido relacionar, a saber, su entrada en Shengen con su nivel de convergencia con la U.E. Las declaraciones de Lellouch implican de hecho una desautorización total

de la tesis rumana de que la entrada en Schengen, objetivo declarado de carácter estratégico por el gobierno, dependa tan solo del cumplimiento de exigencias técnicas. En este sentido, en vano podrán esgrimirse los resultados favorables de la misión que en días atrás estuvo evaluando las instalaciones de los aeropuertos de Otopeni y Timisoara y en los puestos de control fronterizos Stamora-Moravita para el tráfico por carretera y ferrocarril. Las declaraciones del Secretario de Estado francés han conferido a este asunto un carácter plenamente político, como ya hiciera el pasado verano cuando también dijo que la entrada en Schengen estaría supeditada a la demostración por Rumanía de una voluntad decidida de integrar a su población gitana para evitar que se desplazara sin control por el resto de los estados de la Unión. En aquel momento, la amenaza surtió efecto, y el gobierno rumano aceptó firmar un acuerdo con Francia comprometiéndose a elaborar un Plan nacional de integración de la población gitana que debería estar listo antes de fin de este año.

Inmediatamente después de conocerse la amenaza de veto francés, el Embajador de Francia en Rumanía, Henri Paul, se apresuró a matizarlas. Francia, señaló, «no se opone a la adhesión de Rumanía al espacio de Schengen», pero, «está claro que la adhesión a Schengen es parte de un todo, y sobre todo es parte de un estado de ánimo general en el que deben de estar de acuerdo todos los miembros». Para el Embajador francés, no existe en este momento una opinión unánime de los estados signatarios del Tratado de Schengen sobre la ampliación a Rumanía y Bulgaria.

«El próximo informe del Mecanismo de Verificación debería recoger los avances en la reforma del sistema judicial, y ser más positivo y optimista que el último, demostrar un indudable compromiso de Rumanía en la lucha contra la corrupción. Esto le ayudará probablemente a obtener la aprobación de los estados miembros.»

Bucarest ha rechazado tal posibilidad. Tanto el presidente Traian Basescu como el ministro de Relaciones Exteriores, Teodor Baconschi han insistido en que la adhesión depende en gran medida en criterios técnicos, que están seguros de que se podrán satisfacer plenamente a su debido tiempo. Las declaraciones de los altos funcionarios franceses, más parecidas a una amenaza de veto por parte de Francia que a otra cosa, han quedado, sin embargo, ahí, suspendidas, como una espada de Damocles.

Baconschi, por su parte, y el ministro del Interior, Traian Igas pidieron ser oídos por el Parlamento, por iniciativa del Presidente del Senado, Mircea Geoana. En la nota pidiendo la audiencia, el presidente subrayó que «hay señales que sugieren que si Rumanía pierde la oportunidad de unirse a Schengen en marzo de 2011, corremos el riesgo de esperar varios años para participar.» El documento también instaba a las autoridades a no escatimar esfuerzos para convencer a socios europeos que la adhesión a Schengen no es sólo un objetivo estratégico de Bucarest, sino que contribuiría al fortalecimiento de la seguridad de toda Europa.

Pero como los problemas que se anuncian es mejor encararlos cuanto antes, el ministro de Justicia Catalin Predoiu ya se ha reunido en Bruselas con la Comisión Europea Vicepresidente y Justicia, Viviane Reding, y con el Comisionado de Asuntos de Interior Cecilia Malstrom. Las conversaciones se centraron en las políticas públicas del ministerio y el progreso en el Mecanismo de Control y Verificación.

En un proceso paralelo, pero independiente, los expertos de la Comisión Europea inició durante el mes de noviembre una evaluación de dos días de los progresos de Rumania en el mecanismo de cooperación y verificación. Sus conclusiones se incluirán en el informe intermedio que se publicará el próximo año.

Situación económica

Desde el punto de vista de la situación económica, la actividad de los medios de comunicación ha girado en torno a las cuestiones relacionadas con la preparación del proyecto de Ley de Presupuestos del Estado.

El punto de partida ha sido la adopción de un índice de crecimiento creíble para el 2011. Una vez aceptado unánimemente el hecho de que el 2010 se cerrará finalmente con una caída aproximada del 2%, el gobierno ha convenido en aceptar la previsión de crecimiento formulada por la Comisión Europea de un prudente 1,5% para el conjunto de 2011.

Siguiendo esta pauta. El proyecto de ley de presupuesto del Estado para 2011 redistribuye más fondos a los Ministerios de Agricultura, Finanzas, Trabajo, Transporte, Medio Ambiente y Desarrollo, así como a la Administración Presidencial.

Por otro lado, el presupuesto es muy austero en lo que respecta a los servicios sociales. Las pensiones serán congeladas y las aportaciones a la seguridad social de los empleadores y empleados no podrá caer por debajo del nivel actual. Como cuestión de hecho, los jubilados serán los más perjudicados, ya que el Gobierno decidió por primera vez gravar las rentas de pensiones a partir de 740 ron, así como a las que perciben los pensionistas por haber participado en la revolución de 1989 (con excepción de aquellos que sufrieron lesiones).

Tras la reunión del Gabinete en la que se aprobó el proyecto de presupuesto, el Ministro de Hacienda advirtió que el presupuesto de seguridad social todavía era deficitario, y que harían falta al menos unos 33.000 millones de euros del presupuesto del Estado para cubrir el déficit. Entre las prioridades establecidas por la ley el proyecto de presupuesto de 2011 está la co-financiación de proyectos europeos, más dinero para la inversión en infraestructura, menor tasa de desempleo y la estabilización del tipo de cambio RON/ EURO. El Ministro de Hacienda señaló también que el gasto de inversión total crecerá de 7.800 millones de euros a 8.300 y que el número estimado de puestos

de trabajo se incrementará en 23.000. El fondo de desempleo será subvencionado con más de 700.000 euros.

Los ingresos por IVA estima crecerá de 9.280 millones de euros a 10.950 millones y el de los impuestos especiales de 4.142 a 4.380 millones de euros, gracias a los esfuerzos previstos contra la evasión fiscal y la armonización de los impuestos especiales del tabaco con las normas de la UE.

La financiación de las Haciendas locales por medio de los recursos del IVA se reducirá considerablemente, lo mismo que la asignación para infraestructuras, deportes, salarios de los cuerpos docentes y bienestar social. Las autoridades locales ya no podrán financiar las nuevas inversiones y se habrán de crear nuevas fuentes para financiar proyectos por adelantado, con la obligación de completar los proyectos con plazos pendientes de finalización.

Otra limitación que se introduce en el ámbito de la contratación por parte de las instituciones del Estado. Las empresas de propiedad estatal tendrán que congelar los presupuestos del próximo año y mantenerse dentro de las cifras de personal establecido en el 2010. Las empresas con pérdidas o que requieran subsidios del Estado tendrán que limitar los gastos salariales a los niveles del 2010.

Argumentando que el déficit presupuestario del seguro de asistencia sanitaria es demasiado grande, el Ejecutivo ha decidido ampliar la tributación de las pensiones a partir de RON 740, bajando el umbral actual de 1 000 RON. Más exactamente, los pensionistas con ingresos superiores a RON 740 y los que se benefician de una pensión por haber participado en la revolución de 1989, a excepción de aquellos que sufrieron lesiones en la misma, tendrá que pagar el 5,5 por ciento de la renta que perciban al fondo del seguro de asistencia sanitaria. Ello supone la ampliación del conjunto de contribuyentes en unos dos millones de personas.

«No es una decisión muy fácil de hacer, en realidad es una muy delicada. Sin embargo, es necesario y debería haberse hecho hace mucho tiempo. El principio de la que tenemos que empezar, como en muchos otros países, es que la salud es costosa. Nuestra sociedad tiene que aprender de nuevo que la asistencia sanitaria no es gratuita », fueron las declaraciones del ministro de Salud Cseke Atila.

Por departamentos ministeriales, los recortes más drásticos los ha sufrido el Ministerio de Sanidad (un 40%) seguido por el de Defensa (30%). En cambio, los de Agricultura, Transportes, Finanzas y Trabajo verán incrementados sus ingresos, como asimismo el fondo destinado a la Jefatura del Estado.

En lo que se refiere a proyectos financiados con fondos europeos, tendrán prioridad la financiación de las inversiones que tienen que ver con proyectos financiados con fondos externos no reembolsables. Quizá lo más destacable sea la rebaja tan drástica del presupuesto para Salud, que quedará reducido a un 3% del PIB, siendo así que la media europea alcanza un 8%.

Los defensores de este presupuesto tan restrictivo, argumentan que tarde o temprano no habría sido posible evitarlo, en tanto que el problema fundamental de Rumanía es el déficit presupuestario. En este sentido, Lucian Croitoru, asesor del Gobernador del Banco Nacional y antiguo candidato de Traian Basescu a Primer Ministro, declaró durante un seminario que aunque no se hubiera producido una crisis financiera internacional, no habría habido otro remedio que afrontar una crisis interna, y que la única manera de hacerlo es reduciendo el gasto. Según Croitoru, el crecimiento económico en Rumanía sólo será visible en la segunda mitad del 2011, y aún así el potencial de crecimiento será necesariamente lento a corto plazo.

El consumo privado tardará en recuperarse y el sistema bancario se verá incapaz de reanudar sus actividades crediticias debido a que el servicio de la deuda para los particulares es de casi un 22%, lo que supone el doble de la media europea. Es decir, que Rumanía no puede hacer derivar el crecimiento de sus propios ahorros porque de hecho no tiene ahorros. Como quiera que la mayor tasa de deuda está siendo soportada por el sector privado, esta situación se mantendrá durante los años siguientes.

Por lo que respecta a l sector público, el gobernador del banco central de Rumania, Mugur Isarescu, tuvo que salir al paso de rumores aireados por los medios, desmintiendo que el país se encontrara al borde de la suspensión de pagos, tras una declaración en ese sentido del director del Fondo Monetario Internacional (FMI), Dominique Strauss-Kahn.

«En mi calidad de gobernador del Banco Nacional afirmo con total énfasis que no hay ningún tipo de peligro de que Rumania incumpla con sus pagos», declaró Isarescu.

El endeudamiento de Rumania ascendía a fines de septiembre a 89.100 millones de euros, con un porcentaje de endeudamiento del 32 por ciento del producto interno bruto (PIB), el mismo que tiene Irlanda, que acaba de pedir un paquete de rescate de la Unión Europea (UE) y el FMI.

Situación social

Por lo que respecta al ámbito social, durante el mes de noviembre, los medios de comunicación se han centrado en el seguimiento de las repercusiones de los recortes sociales del gobierno y sobre todo de los salarios de los empleados públicos.

Entre las noticias reproducidas, destaca la decisión de un tribunal de Constanta, de dar la razón a un grupo de profesores que demandaron a la institución pública educativa que recortó sus salarios en un 25 % en aplicación de la ordenanza gubernamental publicada en julio. Esta sentencia, que se ha producido tras otra similar de un tribunal de Calarasi, pone en cuestión la legalidad de la medida del gobierno. Un portavoz de éste ha señalado que puesto que la medida fue consultada antes de aplicarse con el Tribunal Constitucional, y que éste decretó lo procedente de la norma, no ha lugar

para que un tribunal inferior se pronuncie en contra. La decisión está, no obstante, ahí, y ha insuflado esperanza y belicosidad a los sindicatos de profesores, que han hablado de extender la demanda a otros tribunales al objeto de sentar un precedente jurídico. El gobierno ha recurrido estas sentencias, con la esperanza de que al final se acabe aplicando la doctrina del Constitucional.

En cuanto a la Ley que reforma y unifica las retribuciones de los empleados públicos, las movilizaciones y protestas protagonizadas en octubre- noviembre por los sindicatos han producido al menos como resultado que el gobierno renuncie de momento a una aplicación lineal de la reforma, como había planeado en un principio. Si bien la reforma debería entrar en vigor en el 2011, su aplicación será regulada por actos separados, cada año, de acuerdo con la situación económica del país.

De un lado, y de acuerdo con el preámbulo del proyecto de ley, en 2011 a los trabajadores del sector público no se les pagará de acuerdo a la tabla salarial nueva. Si se aplicarán, sin embargo, reglas relativas a las bonificaciones y compensaciones, que combinadas no podrá superar el 30 por ciento del salario de un trabajador, mientras que las primas mensuales que podrán concederse a los empleados con un rendimiento excepcional tendrán un tope de dos sueldos básicos al año.

De otro, para calcular la nueva escala salarial en el sistema público, si bien se mantendrán las 11 diferentes categorías de la remuneración, correspondiente a los coeficientes jerárquicos con intervalos de 1.025. ron, el valor de referencia se establecerá por ley cada año.

Según los medios, la versión de la ley presentada por el Primer Ministro Boc contempla aumentos salariales de hasta un 15 por ciento en 2011, pero siempre a partir del nivel actual de los salarios, después de la reducción del 25 por ciento operada en el verano. El Gobierno también está buscando a ofrecer asistencia financiera o cupones de alimentos a los trabajadores del sector público con un ingreso inferior a 1.000 lei, pero el primer ministro se opuso dicha medida, ya que sería discriminatorio para las demás categorías de personal. En cuanto al salario mínimo, las variantes aún objeto de análisis van desde 650 y 690 RON (154 y 164 euros) a la cifra actual de 600 (142 euros). Los sindicatos habían solicitado un salario mínimo de 750 RON (178 euros).

El Ministro de Trabajo, Ioan Botis, por su parte, subrayó que todos los empleados del sector público se beneficiarán de aumentos salariales a partir del año próximo y que la ley general de salarios nueva tiene por objeto eliminar las discrepancias de ingresos del sistema anterior. Todos los empleados en el sector público que tienen posiciones similares, independientemente de la institución para la que trabajan, tendrán los mismos ingresos, explicó.

Botis también dijo que la ley general de retribuciones, que entrarán en vigor en 2011 se completará con actos separados para su aplicación cada año. Añadió que esto ayudará a lograr un aumento salarial significativo, incluso en el sector de la educación y la sanidad.

«Vamos a recuperar constantemente los años siguientes, cuando los salarios puedan crecer a medida que la economía nos permitirá, pero lo que establece la ley general marco, que conducirá a un aumento salarial total de más de 43 por ciento», dijo Botis.